

Acuerdo de 28 de noviembre de 2019, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación de “Servicio de atención central telefónica del Hospital Universitario de Getafe”, número de expediente: PAPC 2019-8-9.

Con fecha 22 de noviembre de 2019, se ha recibido en este Tribunal escrito de la representación de la empresa Integra MGSI CEE, S.L. (en adelante, Integra), formulando recurso especial en materia de contratación contra el anuncio y los pliegos que rigen la contratación del contrato de servicios de referencia del Hospital Universitario de Getafe (en adelante, HUGetafe), publicados el 12 de noviembre de 2019, en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Integra en el escrito de interposición del recurso solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación en tanto se resuelva el recurso, alegando que estando abierto el plazo para presentar ofertas hasta el 9 de diciembre de 2019, al ser el acto recurrido los pliegos y suponer, su eventual estimación, la anulación de los trámites posteriores a su aprobación, con el consiguiente perjuicio para los licitadores y el propio Hospital, con la suspensión del expediente de contratación se evitarían perjuicios, y se garantizarían los derechos de los eventuales licitadores de igualdad de trato, no discriminación, y transparencia.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza



cautelar cuya adopción solicite.

Por la Secretaría de este Tribunal se solicitó el 22 de noviembre de 2019, la remisión del expediente y del preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la LCSP, sin que hasta la fecha se haya remitido, por lo que compete a este Tribunal decidir sobre la medida cautelar sin contar con el pronunciamiento sobre la medida de suspensión del procedimiento de adjudicación solicitada por la recurrente.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto



impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente caso, la actuación que se impugna es la del anuncio de licitación y los pliegos que rigen la contratación con un aparente incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP. El plazo de presentación de ofertas a la licitación objeto de recurso finaliza el 9 de diciembre de 2019, por lo que ante la posibilidad de que la resolución que adopte el Tribunal pueda suponer la retroacción de actuaciones y/o la ampliación de plazo de presentación de proposiciones, se considera procedente suspender el procedimiento de contratación, incluido el plazo concedido para presentación de ofertas en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.4 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso, sin que haya quedado acreditado que la suspensión suponga perjuicio para los intereses generales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,



ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de “Servicio de atención central telefónica del Hospital Universitario de Getafe”, número de expediente: PAPC 2019-8-9, hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **101948919583446389805**